CONSTANCIA SECRETARIAL: Palmira (V.), 20-feb-24. A Despacho de la señora Jueza, la presente demanda que nos correspondió por reparto. Queda para proveer.

MARTHA LORENA OCAMPO RUIZ

Secretaria

Auto Int. N°: 357
Proceso: Otros Asuntos
Demandante: Alex Mauricio Ospina Somera
Demandado: Edefi Construcciones S.A.S.
Radicación: 765204003005-2024-00047-00

JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL

Palmira (V.), veinte (20) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Revisada la demanda de la referencia, se observa que este despacho no es competente para conocer de la misma, por las razones que se pasan a precisar.

Del escrito de demanda se evidencia que, el señor ALEX MAURICIO OSPINA SOMERA impetró acción de protección al consumidor amparado en el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuyas pretensiones son que *“1 Que se declare que el(los) demandado(s) violó(aron) las normas de protección contractual; 2 Que como consecuencia de la anterior declaración, el demandado se abstenga de dar aplicación a la siguiente cláusula Numerales b, de contrato de transacción de contrato de promesa de compraventa”*.

La entidad ante la cual fue radicada la demanda, en decisión del 15 de enero de 2024 se declaró incompetente para conocerla, al considera que quien debía tramitarla era el Juez Civil Municipal de Palmira, bajo el argumento que *“si bien es cierto se invoca el trámite de la acción de protección al consumidor, lo cierto es, que los hechos y pretensiones de la demanda van encaminadas a resolver una controversia ajena a la efectividad de la garantía de un bien o servicio, protección contractual, reparación por daños causados por la prestación de servicios que suponen la entrega de un bien, por información o por publicidad engañosa o por vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios”*.

Habiéndonos correspondido por reparto la demanda el 05 de febrero de 2024, y estando el asunto para la revisión sobre su admisión, advierte este Juzgado, que de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del numeral 1 del artículo 24 del Código General del Proceso, en concordancia con los cánones 56 y 57 de la Ley 1480 de 2011, hay lugar a declarar la falta de competencia y suscitar el conflicto negativo de competencia, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

Como se advierte de los hechos de la demanda, pretensiones y fundamentos de derecho, el demandante pretende *“Que se declare que el demandado violó las normas de protección contractual”*; bajo los postulados de los artículos 56 y 58 de la Ley 1480 de 2011, contentiva del Estatuto del Consumidor, por lo que, no cabe duda que la acción promovida es la de la protección al consumidor, intención que no puede ser modificada.

Al respecto, el artículo 24 del C. G. del P. señala que:

“Artículo 24. Ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas. Las autoridades administrativas a que se refiere este artículo ejercerán funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas:

1. *La superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre:*
 - a) *Violación a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor.*
- (...)

Parágrafo primero: Las funciones jurisdiccionales a que se refiere este artículo, generan competencia a prevención y, por ende, no excluyen la competencia otorgada por la ley a las autoridades judiciales y a las autoridades administrativas en estos determinados asuntos”.

Por su parte, el canon 56 de la Ley 1480 de 2011 establece que:

*“Artículo 56: **ACCIONES JURISDICCIONALES.** Sin perjuicio de otras formas de protección, las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor son:*

2. *<Numeral corregido por el artículo 5 del Decreto 2184 de 2012. El nuevo texto es el siguiente:> La acción de protección al consumidor, mediante la cual se decidirán los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios; los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía; los encaminados a obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de servicios contemplados en el artículo 18 de esta ley o por información o publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía en que se hayan vulnerado los derechos del consumidor”.*

El Tribunal Superior de Medellín Sala Primera de Decisión Civil en decisión del 02 de mayo de 2023 señaló que: *“En virtud del literal “a” del numeral 1º del artículo 24 del CGP, la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá función jurisdiccional en asuntos relacionados con la “violación a los derechos de los consumidores establecidos en el estatuto del consumidor”. Según el parágrafo 1º ejusdem estas funciones jurisdiccionales generan competencia a prevención con los jueces, lo que implica que es el demandante quien decide si escoge a una autoridad y otro, a efectos de que resuelva una pretensión relacionada con el asunto mencionado. Diana Betancur Vélez escogió a la autoridad administrativa como equivalente jurisdiccional en virtud de la prerrogativa ya mencionada; tanto así, que del escrito de demanda se observa con facilidad que utilizó, inclusive, el modelo virtual de demanda dispuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio. La intención de la demandante es absolutamente clara: pretende que se protejan sus derechos como consumidora a través de una pretensión mero-declarativa y una declarativa de condena consecencial. La autoridad administrativa en ejercicio jurisdiccional decidió apartarse del asunto aduciendo que, a su juicio, el caso tiene relación con una controversia que escapa de la órbita del derecho del consumo; sin embargo, su apreciación se aparta de la literalidad de la pretensión esgrimida por la actora que en su petitum expuso de forma diáfana:*

PRETENSIONES

- 1 Que se declare que el demandado vulneró mis derechos como consumidor o usuario
- 2 Reparación del bien

Le asiste razón a la autoridad que propuso el conflicto de competencia, en tanto la Superintendencia de Industria y Comercio en su rol de equivalente jurisdiccional pasó por alto lo pretendido por la actora para desprenderse de la competencia; ésta claramente está invocando sus derechos como consumidora y deprecando la imposición de una prestación de hacer como la “reparación del bien”, propia del derecho del consumo. No pueden confundirse los presupuestos procesales que son objeto de revisión en el análisis preliminar que antecede a la admisión de la demanda, con los presupuestos axiológicos de la pretensión que pertenecen al plano sustancial del debate; aspectos como la existencia o no de la relación de consumo, la calidad de las partes y la procedencia o no del reconocimiento de los derechos del consumidor, son aspectos de fondo que no pueden anteponerse para rehusar la competencia. Que a la equivalente jurisdiccional le parezca más

adecuada una “acción” que otra, no impide que, por acceso a la administración de justicia, la parte demandante pueda invocar sus derechos como consumidora, pretender los amparos que de allí se pueden derivar y que su pretensión sea tramitada y resuelta de fondo y en derecho como garantía de la tutela jurisdiccional efectiva. En ese contexto, le asiste la razón al juez municipal al proponer el conflicto de competencia, en tanto la Superintendencia aquí involucrada decidió anteponer su visión sustancial del caso a la clara pretensión de la demandante de pretender sobre la base de lo que considera una violación a sus derechos como consumidora y a su elección frente al equivalente jurisdiccional.

Bajo los anteriores presupuestos, y teniendo en cuenta que la demanda interpuesta por el demandante es la acción de protección al consumidor con la que pretende la protección de sus derechos como consumidor, claramente hizo uso de la competencia prevención, lo cual en principio obliga al funcionario inicial estudiar de fondo sus pretensiones y después de llevar a cabo el trámite respectivo de la acción, determinar si le asiste razón o no.

Por lo anterior, mal haría este despacho en asumir el conocimiento del presente asunto, pues se estaría vulnerando el derecho de acceso a la administración de justicia –con equivalencia jurisdiccional-, y avalaría el actuar de la Superintendencia de Industria y Comercio quien sin justificación alguna cambió de manera abrupta la voluntad del actor, que solo busca su protección como consumidor.

Por lo expuesto este Juzgado,

DISPONE:

PRIMERO: RECHAZAR el presente asunto, formulado por el señor **ALEX MAURICIO OSPINA SOMERA**, en contra de **EDEFI CONSTRUCCIONES S.A.S.**, por falta de competencia, conforme las consideraciones hechas.

SEGUNDO: PROPONER conflicto negativo de competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales.

TERCERO: REMITIR el expediente al TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BUGA, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE

CLAUDIA VIVIANA CHAVERA CAÑAVERAL

Jueza

2

Firmado Por:

Claudia Viviana Chaverra Cañaverál

Juez

Juzgado Municipal

Civil 005

Palmira - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **870c4a82db81b3d137dcec45565f47c39deab762c847bade4ea4882a534cfb73**

Documento generado en 20/02/2024 01:19:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>